

AMPARO EN REVISIÓN 768/2017
RECURRENTES: HERMINIA
PASANTES ORDOÑEZ Y OTROS

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ
COLABORÓ: ESTEFANIA VEGA MARMOLEJO

VO.BO.
MINISTRO:

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al **seis de diciembre de dos mil diecisiete**.

COTEJADO:

VISTOS; y
RESULTANDO

PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, Herminia Pasantes Ordoñez, Alexandra María Racotta Solacolo, Francisco Rafael Fernández de Miguel y Luis Alonso Lemus Sandoval solicitaron el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en contra las autoridades y por los actos siguientes.

III. AUTORIDADES RESPONSABLES

1. El Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores
2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
3. Secretario de Gobernación

4. Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
5. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
6. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación.

IV. ACTOS RECLAMADOS

A. Del Congreso de la Unión, se reclama la expedición de la Ley General de Salud del 26 de diciembre de 1983, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, en relación con los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247 último párrafo, 248, 368 y 479; con todas sus consecuencias y efectos.

B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama el decreto de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, que promulga y manda publicar la referida Ley General de Salud; con todas sus consecuencias y efectos.

C. Del C. Secretario de Gobernación se reclama el refrendo del aludido decreto promulgatorio de la Ley General de Salud y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, con todas sus consecuencias y efectos.

D. Del Comisionado General de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en su calidad de titular de esa dependencia administrativa, reclaman las órdenes, instrucciones, indicaciones o acuerdos, orales o escritos, que giro a su subordinado el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de esa Comisión, para que niegue la autorización solicitada por los quejosos mediante la aplicación concreta de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, mediante la emisión de los oficios 153300EL350715, 153300EL350718 y 1553300EL350714, de fecha 11 de febrero de 2016, de los artículos; con todas sus consecuencias y efectos.

E. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, reclaman la aplicación en su perjuicio de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud, en la emisión y suscripción de los oficios 153300EL350715, 153300EL350718 y 1553300EL350714, de fecha 11 de febrero de 2016, ya sea que los haya emitido de propio imperio o por instrucciones de su titular; con todas sus consecuencias y efectos.

F. Del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación reclaman la publicación del Decreto Presidencial promulgatorio de la 'Ley General de Salud', en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, con todas sus consecuencias y efectos.

Los quejosos narraron los antecedentes del caso, señalaron como derechos transgredidos los previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 19, 25, 29 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes.

SEGUNDO. Trámite y resolución del juicio de amparo. La demanda se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde en acuerdo de treinta de marzo de dos mil dieciséis fue registrada bajo el expediente 561/2016, admitida a trámite la demanda de amparo, solicitado el informe justificado a las autoridades responsables, dada la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijada fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

Seguido el juicio por sus etapas procesales, en sentencia del treinta de junio de dos mil dieciséis el Juez sobreseyó el juicio de amparo.

TERCERO. Interposición y trámite del recurso de revisión. Inconformes con la resolución anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión.

El Presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –órgano al que por razón de turnó correspondió conocer del asunto– en acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis admitió a trámite el recurso y ordenó su registro bajo el expediente RA 288/2016.

Asimismo, el Presidente de la República interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual fue admitido mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciséis.

Seguidos los trámites de ley, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete el tribunal colegiado del conocimiento emitió sentencia, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos.

PRIMERO. En la materia de la competencia de este Tribunal Colegiado de Circuito, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio por inexistencia de los actos reclamados al Comisionado General para la Protección de Riesgos Sanitarios, en términos de la resolución recurrida.

TERCERO. Remítanse los autos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos correspondientes.

CUARTO. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación –mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil diecisiete–, su Presidente asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión, ordenó su registro bajo el expediente 768/2017, su turno al Ministro José Fernando Franco González Salas y el envío a la Sala de su adscripción.

En acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó remitir el expediente al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de estos recursos de revisión.¹

¹ De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo vigente, así como por los diversos 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto primero, última parte, en relación con el tercero y cuarto, fracción I, inciso c), del Acuerdo General Plenario número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, y que entró en vigor al día siguiente; pues se interpuso en contra de una resolución dictada en la audiencia

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Es innecesario analizar la oportunidad en la interposición de los recursos de revisión y la legitimación de los recurrentes, en atención a que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ya se pronunció al respecto.²

TERCERO. Problemas jurídicos a resolver por esta Segunda Sala. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por considerar que las resoluciones impugnadas no afectaban la esfera jurídica de los quejosos, debido a que dichos documentos no resolvían respecto a la procedencia o no de las solicitudes planteadas.

Lo anterior, debido a que en las resoluciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios los quejosos fueron apercibidos a fin de acreditar su interés jurídico para solicitar dichas autorizaciones, en el entendido que de no desahogar tales apercibimientos serían desechadas sus solicitudes.

Inconformes, los quejosos impugnaron mediante este recurso de revisión la decisión del Juez de Distrito, pues consideraron que no analizó correctamente sus argumentos ya que la demanda de amparo se interpuso con motivo del primer acto de aplicación de los artículos impugnados de la Ley General de Salud, aunado a que desde su perspectiva no tenían que acreditar el interés legítimo de los solicitantes por no ser un requisito previsto en la ley.

Al respecto, el Tribunal Colegiado levantó el sobreseimiento debido a que del contenido de los oficios impugnados advirtió una negativa de lo solicitado, en tanto que la responsable manifestó que no existía disposición alguna en la Ley General de Salud en la modalidad de autorización sanitaria para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del estupefaciente

constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se planteó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, aunado a que se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

² Páginas 6 y 7 de la sentencia emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el RA 288/2016.

“cannabis” y el psicotrópico “THC”, cuando precisamente lo reclamado es la omisión de establecer la posibilidad de llevar acabo el autoconsumo y la determinación de que no existe precepto alguno que establezca la posibilidad de obtener la autorización pretendida.

Por lo que si en los oficios reclamados se determinó que no existía derecho alguno para obtener la autorización pretendida y se les previno para que acreditaran su interés legítimo, se ocasionó un perjuicio a la esfera jurídica de los quejosos y, por ende, sí es procedente el juicio de amparo.

En ese sentido, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud impugnados.

CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es de orden público y su análisis debe efectuarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, sin importar si las partes realizaron argumentos o no, pues así fue establecido expresamente en el artículo 62 de la Ley de Amparo³.

Acorde con ello, esta Segunda Sala advierte de oficio que el juicio de amparo indirecto es improcedente por razones distintas a las analizadas por el Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito.

Para evidenciar lo anterior es necesario precisar la procedencia del juicio de amparo indirecto contenida en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente.

Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

³ Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;

b) Las leyes federales;

c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;

e) Los reglamentos federales;

f) Los reglamentos locales; y

g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo Ley de Amparo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;

VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y

VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.

[Énfasis añadido]

En lo que interesa para la resolución de este asunto, se analizara únicamente la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la cual fue prevista la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

Ello debido a que las resoluciones impugnadas fueron emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es decir, por una autoridad no jurisdiccional, que tiene la facultad de emitir autorizaciones en términos de la Ley General de Salud, dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

Ahora, en la disposición en comento fueron establecidos dos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se impugnan actos, omisiones o resoluciones, provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, los cuales son los siguientes.

I. En el primer supuesto de procedencia fue establecido como regla general que solo pueden impugnarse las violaciones cometidas durante el procedimiento si a causa de ellas el quejoso quedó sin defensa y tal situación trascendió al sentido de la resolución junto con las violaciones cometidas en la propia resolución definitiva; es decir, en la impugnación de la resolución definitiva se tienen que impugnar conjuntamente tanto las violaciones cometidas durante el procedimiento que cumplan con las características referidas, como las cometidas en la propia resolución definitiva.

II. En el segundo supuesto fue establecida una excepción a la regla general referida, consistente en la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos realizados en el proceso que afecten materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, denominados actos de imposible reparación en la propia Ley de Amparo, los cuales pueden impugnarse de forma independiente a la resolución definitiva.

Así, en el caso de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, por regla general el amparo indirecto solo procede en contra de la resolución definitiva con que culmina el procedimiento, pues respecto de los actos u omisiones anteriores a ella que dejaron sin defensa al quejoso y trascendieron al resultado de la resolución, es necesario esperar a que sobrevenga la resolución definitiva para poder combatirlos.

Dicha limitación tiene por objeto evitar la promoción de juicios de amparo indirecto en contra de cada acto intraprocesal de la autoridad, pues lo contrario produciría la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en sus actuaciones frente a los particulares de forma innecesaria, aunado a que por medio del juicio de amparo promovido en contra de la resolución definitiva se pueden reparar todas las violaciones.

Precisado el marco normativo, procede verificar si en el caso se cumple con alguno de los supuestos de procedencia, del juicio de

amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

A juicio de esta Segunda Sala el primer supuesto no se cumple porque en los oficios impugnados por los quejosos solo se les apercibe a efecto de que en un plazo de cinco días acreditaran el interés jurídico que tienen para solicitar las autorizaciones relativas a los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del estupefaciente “cannabis” y el psicotrópico “THC”, mas no son resoluciones definitivas que ponen fin al procedimiento.

Es decir, los oficios en los cuales los recurrentes aducen se les aplicaron las disposiciones impugnadas no resuelven su solicitud de fondo, pues no deciden sobre su petición en algún sentido, ni concluyen el procedimiento, por lo que no pueden considerarse resoluciones definitivas en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, por tanto, no pueden impugnarse en amparo indirecto.

En ese sentido, esta Segunda Sala no comparte lo expuesto por el Tribunal Colegiado relativo a que la responsable manifestó que no existía disposición alguna en la Ley General de Salud en la modalidad de autorización sanitaria para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos del estupefaciente “cannabis” y el psicotrópico “THC”, lo que implica a su juicio una negativa, pues, como se dijo, en los oficios impugnados no se determinó la procedencia o improcedencia de la autorización solicitada, por lo que no hay un pronunciamiento de fondo.

Además, en caso de considerar los reclamantes que no estaban obligados a acreditar el interés jurídico por no establecerlo la Ley General de Salud, debieron externarlo ante la propia autoridad responsable para efecto de que aquella resolviera en definitiva la procedencia de lo solicitado.

Por otro lado, en cuanto al segundo supuesto de procedencia referido, tampoco se cumple en este caso porque los oficios impugnados no constituyen actos que sean de imposible reparación, ni

afectan derechos sustantivos de los solicitantes, dado que, como se precisó, en ellos solo se formularon apercibimientos y no se resolvió la solicitud de los quejosos, por lo cual no se vulnera materialmente algún derecho sustantivo y, por tanto, no son actos de imposible reparación.

No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que los quejosos refieren que promovieron el juicio de amparo con motivo del primer acto de aplicación de los artículos impugnados; sin embargo, esa afirmación por sí sola no hace procedente dicho juicio, ya que tales disposiciones no fueron aplicadas en los oficios combatidos, sino que únicamente se refirieron como marco normativo de la autoridad responsable, pero no se aplicó su contenido para definir la situación jurídica de los solicitantes, es decir, no constituyeron un fundamento para negar o autorizar las solicitudes.

Al respecto sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. ES IMPROCEDENTE SI EL SUPUESTO ACTO DE APLICACIÓN RECLAMADO EMITIDO EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, EN REALIDAD NO MATERIALIZA LOS SUPUESTOS NORMATIVOS. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo establece como regla general que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento. Como una excepción a dicha regla, esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 1/98 con el rubro "AMPARO CONTRA REGLAMENTOS. ES PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO Y ÉSTA CONSTITUYE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.", ha sostenido que el juicio de amparo es el medio idóneo para combatir un acto emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se aplique un ordenamiento legal tildado de inconstitucional; sin embargo, es necesario acreditar como presupuesto para que opere la excepción, que el acto reclamado constituye el primer acto de aplicación de la norma que también se reclama, pues de lo contrario, la procedencia del amparo queda sujeta a las reglas generales del juicio, entre ellas,

la consistente en que el agraviado debe esperar a que se dicte la resolución definitiva en el procedimiento correspondiente. De no adoptarse lo anterior, se caería en un abuso injustificado del juicio de amparo, pues ante actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no constituyan resolución definitiva, bastaría que se indique que en ellos se dio el primer acto de aplicación de una ley o reglamento, aunque no sea así, para hacer procedente la acción de garantías, lo cual desde luego pugna con la intención del legislador plasmada en la fracción II del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, además de que no encuadra en la jurisprudencia antes citada, pues la misma sólo autoriza a promover amparo cuando se reclame una resolución, que sin ser la definitiva, efectiva y realmente constituya el primer acto de aplicación.⁴

LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PARA QUE SE DEMUESTRE QUE SE APLICARON, NO BASTA QUE SE CITEN LAS NORMAS RECLAMADAS, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN ELLAS. Aun cuando en una orden de visita o el acta relativa que se reclamen en amparo y que tuvieran por objeto verificar si la negociación de la quejosa cumple con la ley, también impugnada, las autoridades responsables mencionen las disposiciones reclamadas, esa circunstancia no es suficiente para considerar que éstas ya fueron aplicadas, si no existen actos concretos que actualicen lo dispuesto por las normas. En esas condiciones, si no se han actualizado las hipótesis previstas en las disposiciones legales, debido a que la autoridad administrativa no ha utilizado la facultad que le confieren, no puede estimarse que ya existía acto concreto de aplicación. Así las cosas, si las disposiciones legales, fueron reclamadas con motivo de su aplicación, sin haberse demostrado ésta, es claro que la sola existencia de las referidas normas no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, por lo que se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo.⁵

En consecuencia, de conformidad con el artículo 107, fracción III, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados, así como

⁴ Época: Novena Época, Registro: 196100, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Común, Tesis: 2a. LXXXIV/98, Página: 145

⁵ Época: Novena Época, Registro: 200126, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Común, Tesis: P. LXVII/96, Página: 113

de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

QUINTO. Recurso de revisión adhesivo. Dado el sentido de esta resolución, se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de la República.

Lo anterior porque el interés de la parte adherente está sujeto a la determinación que se tome respecto del recurso principal, por lo que cuando el sentido de la resolución emitida en éste es favorable a sus intereses, desaparece la condición a la que estaba sujeto el interés jurídico de aquélla para interponer la adhesión, por lo que debe declararse sin materia.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 166/2007 de esta Segunda Sala, cuyo rubro es *“REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA.”*⁶

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto los actos reclamados, así como de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud.

TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia.

⁶ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 552.

NOTIFÍQUESE con testimonio esta resolución, devuélvanse los autos del juicio de amparo al tribunal de origen y en su oportunidad archívese este tomo.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas (ponente), Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo Medina Mora I. El señor Ministro Javier Laynez Potisek emitió su voto en contra y anuncia que formulará voto particular. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, emitió su voto en contra de consideraciones.

Firman el Ministro Presidente, el Ponente y el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I.

PONENTE

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA

LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ

Esta hoja corresponde al amparo en revisión 768/2017, recurrentes: Herminia Pasantes Ordoñez y otros, fallado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el siguiente sentido: **PRIMERO.** En la materia de la revisión competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se modifica la sentencia recurrida. **SEGUNDO.** Se sobresee en el juicio de amparo respecto los actos reclamados, así como de los artículos 234, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 368 y 479 de la Ley General de Salud. **TERCERO.** Se declara sin materia el recurso de revisión adhesivo en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. **CONSTE.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.